

LA IGLESIA Y LA CRISIS CENTROAMERICANA

En el turbulento mundo actual la jerarquía de la Iglesia católica se ha pronunciado con frecuencia sobre la guerra y la paz, los derechos humanos, las ideologías y la justicia. A veces los pronunciamientos son más genéricos, como los que normalmente provienen del Vaticano, pero con creciente frecuencia son más concretos, tocan las coyunturas y se enfrentan con políticas gubernamentales o grupos de oposición. Por citar sólo algunos ejemplos, los obispos canadienses analizaron y criticaron su sociedad capitalista y los estadounidenses, el rearme nuclear, mientras que los obispos franceses e ingleses defendieron moderadamente su legitimidad. En Chile, el obispo auxiliar de Concepción exigió la abolición de la policía secreta poco después de que un padre de familia se inmolase como protesta por la captura y desaparición de dos de sus hijos. El Cardenal Sin, arzobispo de Manila, pidió en Roma la renuncia del presidente Ferdinando Marcos y poco después lo insinuaron los 110 obispos de la conferencia episcopal filipina. Las diversas actuaciones del Papa Juan Pablo en su Polonia natal son también ejemplo de ello.

Estas actuaciones no son nada nuevo en la Iglesia, aunque si sorprendan un poco las tomas de postura concretas más allá de declaraciones universales. El recientemente promulgado derecho canónico en el canon 742,2 sanciona de nuevo el derecho de la Iglesia a estas intervenciones al afirmar que "compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar un juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas". Pero, además de un derecho, es una grave obligación moral.

En Centroamérica los conflictos y las crisis son sumamente graves, sólo comparables en el momento actual a las del cercano Oriente, y la jerarquía católica se ha pronunciado sobre ellos. Así lo hizo el Papa en su viaje de marzo y en sucesivas declaraciones desde el Vaticano, así lo ha hecho la conferencia latinoamericana de obispos (CELAM) en julio y la centroamericana (SE-DAC) en agosto. Pero además de esas declaraciones globales, la jerarquía de cada país ha ido tomando postura sobre los problemas específicos de su país, aunque dentro del contexto centroamericano. Sus declaraciones versan (1) sobre lo más hiriente y amenazante de la crisis, es decir, la guerra y la paz, (2) sobre las masivas violaciones de los derechos humanos y algunos efectos más sobresalientes de la guerra, como los miles de refugiados y desplazados, (3) sobre la injusticia y la justicia, causa y solución última de los conflictos, (4) sobre las soluciones que se vislumbran. En todo ello la jerarquía trata de tomar postura ante los hechos reales, aunque determinados prejuicios ideológicos y teológicos guíen la lectura de la realidad y de sus soluciones. En todo ello la jerarquía ha tenido que tomar postura, de una u otra forma, con los poderes políticos y militares, y sufrir o evadir sus consecuencias. Veámoslo brevemente en cada uno de los países.

En Honduras el hecho más flagrante es la intervención norteamericana y la hipoteca de la soberanía nacional, en nombre del anticomunismo y para conseguir beneficios económicos. Pende siempre la amenaza de guerra con Nicaragua y el involucrarse militarmente en el conflicto salvadoreño. La violación de los derechos humanos ha aumentado y los miles de refugiados representan un serio problema para el país. Ante ello, la jerarquía ha declarado su decisión por la

paz ante todo, reforzada esa decisión por las palabras de Juan Pablo II a los obispos hondureños en Roma: "Vuestro país...está enclavado en un área geográfica muy sensible, azotada hoy por fuertes tensiones socio-políticas y por un peligroso clima de violencia que provoca tantos sufrimientos y aprensiones. Es necesario, por ello, que fieles a la constante tradición de la Iglesia y en conformidad con el espíritu del Evangelio, tratéis de sembrar en los ánimos de vuestros conacionales sentimientos de amor a la paz interna y de pacífica convivencia con los otros pueblos" (26.9. 1983). También ante la política interna, anticomunista a ultranza, la Iglesia está dando muestras de apartarse institucionalmente del poder constituido, lo cual le ha costado una creciente persecución a sus catequistas, señalamiento a sus sacerdotes y fuerte control para el ingreso de sacerdotes y religiosos. Por lo que toca a los refugiados, con frecuencia los ha defendido y ha denunciado las violaciones a sus derechos y el riesgo que representa para sus vidas el ejército salvadoreño y hondureño. Por lo que toca al punto central de la intervención norteamericana, los prejuicios ideológicos se dejan sentir. Mala es ésta, pero no se condena con claridad ante el temor de su contrario. Ante la prohibición gubernamental hondureña a la entrada de unas 300 religiosas norteamericanas para protestar contra la presencia de soldados de su país, nada ha dicho

—que se sepa— la jerarquía; según algunas noticias de prensa, la decisión gubernamental habría contado con la aprobación de la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

En **Guatemala** la situación sigue siendo trágica, como lo recordaron los obispos ante Juan Pablo II: "una sociedad desgarrada por el flagelo de la violencia, que ha golpeado en forma despiadada especialmente a los indígenas y campesinos, aldeas, destruidas, campos arrasados, centenares de miles de guatemaltecos que huyen del terror de las fuerzas en pugna y deambulan bajo el látigo del hambre, de la enfermedad y del miedo... Una patria ensangrentada por una larga y cruenta lucha entre hermanos, que aún gime bajo el peso de la injusticia y no encuentra el camino justo de la reconciliación y el perdón" (5. 11. 1983). En su discurso de respuesta al día siguiente, el Papa volvió a recalcar la situación de represión en el país —como lo hiciera con fuerza en su viaje a Centroamérica cuando habló en Guatemala—, recordó la cruenta persecución a la Iglesia y denunció la aberrante justificación, defendiendo así a los agentes de pastoral, que se da para la persecución: "Que nadie pretenda confundir nunca más auténtica evangelización con subversión, y que los ministros del culto puedan ejercer su misión con seguridad y sin trabas". Que en estas palabras había un claro ataque al gobierno de Guatemala lo muestra la aira-





da reacción de su presidente, general Oscar Mejía Victores, acusando a la Iglesia de propiciar la subversión y la guerrilla. La respuesta más elocuente y trágica fue el asesinato del franciscano guatemalteco, Augusto Ramírez Monasterio, superior de la Iglesia de San Francisco, de la ciudad de la Antigua, el 9 de noviembre. El gobierno de nuevo acusó a la izquierda de tal asesinato sin más pruebas que su nada creíble palabra. Los hechos muestran lo contrario. El P. Ramírez fue capturado por cuerpos de seguridad, torturado antes de ser asesinado y arrastrado desde un carro a lo largo de 150 metros para que su cadáver quedase desfigurado e irreconocible. La Iglesia, pues, sigue siendo perseguida por el gobierno, y ninguno de los sucesivos diálogos resuelven la situación. Es una Iglesia debilitada, diezmada, con muy buena voluntad para defender a indígenas y campesinos, pero sin fuerza para ello, desaglutinada. Tristemente está sufriendo las consecuencias de la gestión del anterior arzobispo y cardenal. La valentía actual de sus declaraciones, muy meritoria por los riesgos que implica, no es suficientemente eficaz porque tras ella no se encuentra una Iglesia unida y fuerte en las bases.

En El Salvador sigue la guerra, la destrucción, la desintegración política, la cruel violación de los derechos humanos y el número creciente de refugiados y desplazados que llegan ya al millón. La jerarquía eclesiástica a través de Mons. Rivera y, cada vez más, a través de Mons.

Gregorio Rosa ha ido juzgando todos esos hechos e iluminando su solución. Con claridad han denunciado todas las violencias de los derechos humanos, por parte de la derecha y de la izquierda; pero, por honradez con la realidad, sobre todo los de la derecha. Con claridad han denunciado los hechos más bárbaros, como bombardeos injustificados y militarmente innecesarios contra la población civil, como en el caso de Tenancingo; secuestros y asesinatos por parte de los escuadrones de la muerte, denunciando su clara connivencia con miembros del ejército y de los cuerpos de seguridad, facilitado esto por la nueva postura de la administración Reagan; ha denunciado también la inutilidad de una Constitución y de las anunciadas elecciones si no se encaminan a garantizar la justicia —concretada en los artículos de la Constitución sobre la tenencia de la tierra— y a terminar con la guerra. Como dijo Mons. Rivera en su última homilía (11.12.1983) la campaña de elecciones no necesita ser de altura —slogan repetido por los partidos para intentar dar credibilidad al proceso electoral, altura que por cierto brilló por su ausencia en las elecciones del 82—, sino realista; es decir, que se enfoque clara y directamente a resolver lo que el pueblo desea: que termine la guerra, que termine pacíficamente y que termine pronto. Si eso no ocurre, vana será la nueva solución política, ha vuelto a repetir Mons. Rivera, como vana lo fue la anterior. Incansablemente

ha propuesto el diálogo y la negociación como forma eficaz y humana de terminar el conflicto, comprometiéndose personalmente con ello a pesar de los riesgos y amenazas que le ha ocasionado. El interés por humanizar el conflicto, mientras éste dure, es cada vez más real y eficaz, y las diversas vicarías y secretariados de la arquidiócesis están aunando esfuerzos en la pastoral asistencial, catequética y de defensa de los derechos humanos.

Todo ello no se hace sin graves riesgos, lo cual muestra que la Iglesia hace sentir su peso en la sociedad. Ha seguido la persecución a las comunidades cristianas y, novedosamente, a las de confesiones protestantes; la Tutela Legal del Arzobispado ha sido hostigada, así como colegios católicos y las residencias de los padres jesuitas. Más llamativamente, un escuadrón de la muerte amenazó en público a Mons. Rivera y Mons. Rosa si no dejaban de predicar en la forma descrita. En el colmo de la insensatez, días después de esa amenaza fue secuestrado el padre de Mons. Rosa por miembros del ejército, lo cual mostró una vez más la relación entre escuadrones de la muerte y fuerzas gubernamentales, pues la amenaza de aquéllos fue reforzada por éstos. En solidaridad con los amenazados, la conferencia episcopal publicó un breve, pero sentido mensaje, dirigido a todos, pero más claramente al gobierno: "Haciéndonos portavoces del clamor de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, rogamos respetuosamente a las autoridades del país que hagan cuanto está de su parte para poner fin a esta situación de inseguridad permanente". "Decimos en nombre de Dios, dueño de la vida y de la muerte: ¡Basta! ¡Ya no más muertes, amenazas, ni secuestros, ni nada que puede envilecer al hombre que es la imagen de Dios!" (10.11.1983).

En Nicaragua el hecho externo más grave es la guerra declarada y la amenaza de invasión. Internamente, están los intentos y logros de la revolución en favor de las mayorías a los niveles de alimentación, salud y alfabetización por un lado, y las tensiones políticas y las restricciones en algunos de los derechos políticos y civiles por otro. La situación de la Iglesia en este país es la más conocida internacionalmente y, ciertamente, la más aireada y la que está presentada con mayor grado de ideologización y propaganda. Que la Iglesia en Nicaragua está muy dividida es un hecho; y la razón fundamental está en la toma de postura favorable o crítica al proceso revolucionario. Dadas las fuertes amenazas al proceso,

la serenidad para evaluarlo críticamente se hace muy difícil, tanto para quienes lo favorecen como para quienes desean que se derrumbe. Por lo que toca a los obispos el problema mayor está en la ideologización que guía la lectura de la situación, de modo que los hechos concretos que ocurren, positivos o negativos para las mayorías pobres, no se convierten en criterios de juicio. Desde ahí hay que entender los numerosos incidentes entre jerarquía y sandinismo, más allá de los fallos concretos que unos y otros cometen. Desde esa actitud, cualquier cosa que ocurre, desde la campaña de alfabetización a las procesiones, desde supuestas apariciones de la Virgen a que sacerdotes colaboren con el gobierno, es vista y evaluada no en su realidad intrínseca, sino como piedra de toque para saber si alguien está en favor o en contra del sandinismo. Los incidentes últimos más notables han sido la visita del papa y la ley del servicio militar obligatorio. Estos han desencadenado una mayor división y una más clara condena de los obispos al sandinismo, pero la razón última no está en la realidad de los hechos en sí, sino en la decisión previa contra el sandinismo. Que la postura de los obispos está ideologizada se desprende, creemos, no tanto de lo que dicen —en varias de cuyas críticas al sandinismo tienen razón—, sino en lo que callan. Se han callado sobre la guerra interna, sobre los ataques más despiadados, como en el bombardeo a Corinto, sobre el boicot económico, sobre los logros reales en favor de las mayorías pobres. Nada han dicho en público sobre los ya centenares de muertos nicaraguenses, más allá de si son sandinistas o antisandinistas. Este silencio es incomprensible y escandaloso, y muestra que por encima de todo su decisión es la de no hacer o decir nada que, aunque objetivamente cierto, pudiera ser interpretado como favorecedor del sandinismo. Por ello mismo, su crítica al sandinismo, aunque sea correcta en varios puntos, no es denuncia profética, como dicen, pues la denuncia profética tiene como objeto el bien de las mayorías pobres y como presupuesto el análisis de la realidad desde los pobres. Por mucho que aclaren su posición, los obispos dan la impresión objetiva de defender a la contrarrevolución, que los usa como símbolos importantes y como actores de la lucha al nivel ideológico. Muy recientemente, las declaraciones de Mons. Obando en Roma y Caracas, de Mons. López Fitoria en Miami hablan claramente de Estado totalitario y de persecución a la Iglesia, cosas ambas que atacarían de raíz los valores aceptados en el mundo

occidental: la democracia y la libertad de religión. Nada mejor pueden desear los enemigos del sandinismo. Pero de nuevo, hay que ver la realidad. Que exista restricción a los derechos civiles, que exista la dinámica siempre peligrosa, de fiscalizar la vida pública y personal, que existan tensiones entre el gobierno y la Iglesia, que el gobierno ha expulsado a algunos sacerdotes, todo ello es cierto, pero hay que verlo con objetividad y con el realismo de comparar esta situación con la anterior en tiempos de somocismo y con la situación de los otros países del área, que supuestamente, presentan una mejor estructura social, más 'democrática' y 'cristiana'. Con sorpresa e indignación se pudo ver en El Salvador un programa televisivo sobre la persecución a la Iglesia, que trataba sobre la persecución a la Iglesia en Nicaragua. Para los cristianos salvadoreños y los guatemaltecos el programa era un insulto, como si lo que ocurre en Nicaragua fuese la más grande de las persecuciones, cuando recordaban los 29 sacerdotes y religiosas asesinados en su país, los centenares de catequistas y los miles de cristianos. La última celebración de la Purísima, la noche del 7 al 8 de diciembre, supuso una manifestación popular y religiosa impensable y absolutamente imposible en El Salvador o Guatemala.

Nada de lo dicho quita importancia y necesidad a evaluar también objetivamente la realidad de la revolución sandinista, sus logros y sus fallos; a evaluar también el apoyo que los cristianos dan al sandinismo y cuál es la mejor forma de apoyo a lo positivo del proceso, que no es sin más el aplauso incondicionado. Pero al hablar de la Iglesia no se puede ignorar la responsabilidad de la jerarquía y la objetividad de sus acciones. Recientemente se encendió una lucecita de esperanza cuando los obispos aceptaron un diálogo con la junta de gobierno. Hubo diálogo, al menos, y claridad en presentar los graves problemas de parte y parte. Al final los obispos dijeron que estaban en contra de la invasión militar. Pero Mons. Vega añadió que estaba también en contra de la invasión ideológica. Y cuando le preguntaron cuál era peor respondió gráficamente que era como tener dos pistolas en las sienas. Preguntado de nuevo cuál era la más mortal, respondió que la invasión ideológica.

El futuro de la Iglesia en Nicaragua es difícil; la desideologización es urgente, en todos. Pero la jerarquía debiera dar ejemplo, abrirse a un diálogo sincero, animar a los cristianos y no condenar, evangelizar a fondo desde los pobres y

a los pobres. Quizás allá se encontrarían mayores convergencias y también más credibilidad en la crítica.

Muchos otros obispos de otros países se han expresado sobre Centroamérica, pero especialmente los de **Estados Unidos**. Desde 1980, Mons. Roach y Mons. Hickey han hablado en nombre de toda la conferencia episcopal repetidas veces y han certificado ante comités del Congreso y de la comisión Kissinger; obispos particulares, como Mons. Quinn de San Francisco a Mons. John R. McGann, obispo de Rockville Centre, New York, han escrito cartas pastorales en octubre y en julio sobre Centroamérica y El Salvador. Lo esencial de su postura ha sido oponerse a la política militarista del Presidente Reagan, denunciar las violaciones de los derechos humanos, propiciar soluciones políticas negociadas, presionar por el buen trato a los refugiados centroamericanos en Estados Unidos y exigir que la ayuda económica llegue a los necesitados. Todo ello lo han hecho por responsabilidad, en cuanto ciudadanos estadounidenses, por solidaridad con las Iglesias y países sufrientes y por agradecimiento, como repiten, al testimonio evangélico de esas Iglesias. En conjunto han seguido la línea de los obispos centroamericanos en favor de la paz, pero con mayor libertad y claridad que varios de ellos.

Esta es a grandes rasgos la situación de la Iglesia en Centroamérica vista desde la jerarquía. En conjunto desean trabajar por la paz y para que cese la guerra; denuncian las violaciones a los derechos humanos; trabajan por aliviar los sufrimientos que originan los conflictos; desean cambios políticos y estructurales que aseguren la justicia. A nivel ideológico en el conflicto existe cierta parálisis y miedo a que se imponga otra ideología que la convencional del mundo occidental. A la larga esto presenta problemas para la Iglesia, pues en ninguna parte está escrito que ese mundo sea el único o el mejor para la Iglesia. Si ese mundo cambia, se hace sandinista o revolucionario de alguna forma, la Iglesia tendrá que aprender a vivir en él, a evangelizar en él, o sufrir en él, a criticarlo y denunciarlo, pero en nombre del Evangelio y no del mundo occidental, a incorporar también los valores que esa sociedad propicie. A la corta es importante que siga trabajando más y más por evitar lo más flagrante y amenazador de la situación: más guerra en cada uno de los países y una regionalización de la guerra.

H.O.